



*Caridad Hernández García.  
Directora General de Relaciones con  
la Administración de Justicia - Ministerio de Justicia-*

---

## **PONENCIA DE CLAUSURA PARA EL IV CONGRESO DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO**

---

Buenos tardes a todas y a todos.

Es un honor y un privilegio para el MJU participar en la clausura de este IV Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, que se celebra en este sitio emblemático y en el que, durante dos días, se han tratado aspectos de gran importancia e interés en la lucha contra la violencia de género como ha sido su dimensión internacional, la perspectiva de las víctimas especialmente vulnerables y una visión tan nuclear como es la prevención del riesgo de violencia de género.

Por otro lado, en nombre del MJU quiero felicitar a las personas directamente responsables por la espléndida organización de este Congreso y también hay que felicitarse por la asistencia y participación de todas las personas interesadas que sin duda han contribuido a enriquecer y mejorar este espacio de reflexión.

Dicho esto, también es necesario y no podemos dejar pasar por alto para manifestar nuevamente nuestro apoyo incondicional a todas las personas que, desde distintos ámbitos, trabajan día a día para acabar con esta lacra social que tantas víctimas deja en el camino.

Sin duda, hay que resaltar el gran trabajo que realizan, entre otros, las Asociaciones de Mujeres, las cuales están teniendo un papel fundamental en las campañas de sensibilización que se llevan a cabo en la lucha contra la violencia de género.

El avance obtenido a día de hoy en esta materia ha sido muy positivo pero sin duda queda mucho por hacer mientras exista una sola víctima de violencia machista.

La labor realizada ya está dejando ver sus frutos; la sociedad cada vez está más concienciada de que la violencia del hombre sobre la mujer no está justificada en ningún caso ni puedan quedar reducida al ámbito privado. Se ha interiorizado por lo/as ciudadano/as el rechazo que merecen estas conductas y eso sin duda es un gran paso.

Pero no sólo es necesaria la implicación de la ciudadanía en este tema tan delicado sino que todos los poderes públicos debemos aunar fuerzas y recursos en la lucha contra la violencia de género.

De ahí, la importancia de las políticas transversales en esta materia, la necesidad de coordinación y de una actuación de manera unitaria y firme por parte de todas las instituciones involucradas.

Pero esta necesaria coordinación y unidad no queda limitada a las fronteras nacionales sino que como muy bien se ha explicado tiene una dimensión internacional innegable.

Desgraciadamente, en todos los países del mundo, existen víctimas de violencia de género, de ahí la importancia de analizar también las políticas adoptadas internacionalmente en este ámbito pues pueden aportar ideas a la hora de luchar contra la misma.

En este sentido, cabe destacar los avances obtenidos en la protección de las víctimas de violencia de género gracias a la cooperación entre los diversos países que conforman la Unión Europea, lo que ha dado lugar a que por fin este año, el 23 de septiembre de 2011, los ministros de Justicia de la Unión Europea hayan aprobado la euroorden de protección para mujeres víctimas de la violencia de género.

Como ustedes conocen, la euroorden ha sido una de las prioridades más relevantes de la Presidencia española de la Unión Europea.

Responde a una iniciativa española que fue lanzada en enero de 2010 con el copatrocinio de otros once socios. Se trataba, resumiendo, de situar a las víctimas en el centro de atención de la cooperación jurídica y judicial en Europa.

Los debates sobre esta propuesta española fueron prolijos y profundos pero finalmente se ha obtenido el apoyo de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo.

La orden europea permitirá proteger a las víctimas de violencia y extender a los demás estados de la UE las medidas *equivalentes* de protección dictadas por uno de los países miembros.

La nueva normativa se centrará “en los delitos que pueden poner en peligro la vida de la víctima, su integridad física, psicológica o sexual y su libertad personal”, así lo ha precisado el Consejo de Ministros de la UE. Las medidas de protección nacionales que quedarán extendidas al resto de países de la UE incluirán las ordenes de alejamiento y la prohibición de contacto físico, telefónico o por medios de comunicación electrónicos.

El contenido de la orden europea de protección de víctimas de delitos se ha consensuado ya con el Parlamento Europeo, por lo que se prevé una tramitación parlamentaria rápida para que la nueva normativa europea pueda ser aprobada

definitivamente antes de final de año. Fue aprobada por unanimidad en Comisión y será sometida al Pleno el día 13 de diciembre próximo.

Los países deberán adaptar las nuevas normas en el primer trimestre de 2012, y como tarde se aplicarán en 2014.

Volviendo a los avances obtenidos en materia de violencia de género, decir que la tarea de concienciación y sensibilización de los primeros años ha ido seguida de una serie de políticas y medidas concretas para lograr erradicar la violencia de género.

Se ha trabajado duro desde todos los ámbitos, y en muchos casos, como resultado de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se han obtenido importantes avances en aspectos preventivos, de protección y atención a las víctimas de este tipo de violencia.

Fruto de la LO 1/2004 fueron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, órganos especializados en el orden penal. Así desde la entrada en vigor, el 29 de junio de 2005, de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se han creado y constituido un total de 106 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer a 31 de diciembre de 2011.

Creación juzgados de violencia sobre la mujer año	2005	18
“ “ “ “ “ “	2006	22
“ “ “ “ “ “	2007	43
“ “ “ “ “ “	2008	9
“ “ “ “ “ “	2009	11
“ “ “ “ “ “	2010	3
<u>Total a 31 de diciembre de 2011</u>		<u>106</u>

A los juzgados exclusivos citados habría que añadir, al objeto de exponer una visión global de conjunto, los actuales 355 juzgados compatibles –juzgados de instrucción o primera instancia e instrucción en su caso, que compatibilizan estas funciones con las del resto del orden jurisdiccional penal o penal-civil de su partido judicial- y cuya finalidad es conseguir que en todos los partidos judiciales del territorio nacional se preste una atención adecuada a las necesidades existentes en todo lo relacionado a la violencia de género, bien sea por medio de un juzgado exclusivo o compatible.

Como ustedes ya conocen, otras medidas de tutela judicial a destacar son:

La creación de la Fiscalía de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer con dos plazas de Fiscales adscritas y de una sección de la misma en cada Fiscalía territorial, a las que se adscriben Fiscales especializados en la materia.

Podemos afirmar, por tanto, que en todas las secciones de violencia sobre la mujer de

las fiscalías provinciales, preceptivamente, existen fiscales especializados en violencia sobre la mujer, que son adscritos a los órganos jurisdiccionales que decide el fiscal jefe provincial en cada caso.

Resulta significativo el incremento de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, sobre todo en los últimos años, en este ámbito específico y que han ido dirigidos a dotar a todos los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer que se han ido creando en toda nuestra geografía de una plaza de fiscal que desarrolle sus funciones sólo en el órgano judicial especializado al que haya quedado adscrito. Así desde 2007 a 2011 se han creado un total de 66 nuevas plazas de fiscal vinculadas a los JVM.

También he de referirme al sistema de seguimiento y control por medios telemáticos de las medidas cautelares de alejamiento, mediante dispositivos electrónicos cuya imposición puede ser ordenada por los órganos judiciales y que a través del geoposicionamiento del imputado y de la víctima consigue un triple objetivo, mejorar el contexto de seguridad de la víctima, documentar el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento y disuadir al agresor, destacando que las labores de monitorización, seguimiento y control de las alarmas que se produzcan son desarrolladas por puestos de operación las 24 horas al día, los 365 días del año.

Dicha protección ha requerido la actuación conjunta de los Ministerios de Igualdad, actualmente Sanidad, Política Social e Igualdad, Interior y Justicia en cumplimiento del Plan Nacional de Sensibilización contra la Violencia de Género.

En tal sentido, destacar que el 8 de julio de 2009 se suscribió un Acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el del Interior, el de Igualdad, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado para la implantación del Protocolo de actuación, a fin de garantizar y homogeneizar la operatividad del seguimiento por medios telemáticos en todo el territorio nacional, estableciendo pautas generales de actuación y comunicación que faciliten la adecuada intervención en cada supuesto concreto.

Tras el análisis de los resultados obtenidos, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha propuesto formalizar la extensión del Sistema de Seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de Violencia de Género al control del cumplimiento de las penas de alejamiento. El MJU ya tiene informe favorable de la Abogacía del Estado para ampliar este sistema.

Quisiera ahora detenerme en un importante instrumento de protección: el Registro Central de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

Por mandato legal en el año 2004 se creó este registro que recoge todos los datos judiciales relativos a los asuntos de violencia doméstica y de género. Esta herramienta nos ha permitido pasar de pocos y dispersos datos sobre el fenómeno a tener un seguimiento individualizado de los casos que es pionero en toda Europa.

Este Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia tiene como finalidad establecer un tratamiento *jurídico y organizativo* uniforme de todos los registros y se fija el objetivo de alcanzar la interconexión entre todos ellos para evitar errores, duplicidades y trabajos innecesarios.

De hecho, se ha culminado un proceso de renovación e integración tecnológica de los registros administrativos de apoyo a los órganos judiciales que ha mejorado significativamente todos los registros y también el de violencia.

En el caso del Registro de Violencia, la nueva aplicación facilita la comunicación telemática entre órganos judiciales y fuerzas de seguridad, incorpora un sistema de alertas más eficaz y permite consultas cruzadas de todo tipo.

A estos efectos se celebró un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior para el seguimiento integral contra la violencia de género. Mediante este convenio se han establecido los sistemas y conexiones informáticas necesarias para que, de un lado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan acceder a los datos existentes en el Registro Central de Víctimas de la Violencia doméstica y, de otro, los Fiscales puedan acceder a la base de datos policial del Ministerio del Interior en materia de violencia de género. En efecto y gracias a este convenio, el fichero informático policial instalado permite no sólo un seguimiento pormenorizado de cada caso sino una mejor valoración del riesgo.

Una mención especial debe hacerse al derecho a la asistencia jurídica gratuita que se reconoce a la víctima. Como saben, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen reconocida la asistencia letrada inmediata e integral, no sólo en todos los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos (incluidos por tanto las diligencias policiales) que tengan su causa fundamentada en la violencia de género, hasta la total ejecución de sentencia, sin necesidad de tramitar previamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita.

Ello significa que el incidente de justicia gratuita no obstaculizará nunca al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, la cual ha de prestarse a la víctima con independencia de que la solicitud de gratuidad no haya sido promovida.

Para hacer efectiva esta previsión legal, el Ministerio de Justicia, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, ha incrementado los incentivos para adscribirse al turno de violencia de género y ha establecido la obligación para los colegios de abogados de crear turnos de guardia en esta materia (Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre).

En consecuencia, se han incrementado lo/as letrado/as que prestan estos servicios. Actualmente, en las comunidades autónomas que aún gestiona el Ministerio de Justicia, hay cerca de 2000 letrado/as adscrito/as al turno de violencia de género.

Como saben, la gestión y el pago del servicio de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita están transferidos en la mayoría de las comunidades autónomas junto con el resto de competencias en materia de justicia. En el año 2010: se ha abonado 1.624.539,70 Euros, habiendo prestado el servicio a 7.764 mujeres y este año (2011) el Ministerio, por el momento, ha abonado un total de 1.501.233,81 euros en asistencia jurídica gratuita, alcanzando la protección a un total de 6.881 mujeres víctimas de violencia de género.

Es decir, se está haciendo un esfuerzo muy importante, tanto desde las comunidades como desde el propio ministerio, para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género estén adecuadamente asistidas.

No se trata únicamente, como fácilmente podrán imaginar, de número de abogados y de euros gastados. Se trata también de que la asistencia en una materia tan compleja como es la violencia y que afecta a tantas ramas del derecho sea de calidad.

En este sentido hay que destacar que las asociaciones de mujeres han establecido unos niveles de calidad en la asistencia letrada a las mujeres que debe ser referencia para el turno especializado de los colegios de abogados.

Por otro lado, a efectos de reforzar el derecho que tienen las víctimas a la tutela judicial efectiva garantizado por nuestro sistema procesal, se han adoptado medidas de apoyo específico y especializado, entre las que se encuentran las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y las Unidades de Valoración Integral Forense

En cuanto a las primeras, destacar la importantísima labor que desempeñan las 23 OAV que hay en el territorio competencia del MJU.

Estas oficinas que realizan una función esencial, asisten a las víctimas de forma complementaria a la protección garantizada por la tutela judicial, orientándolas, informándolas de sus derechos y si es necesario acompañándolas a juicio y ofreciéndoles atención psicológica, según el protocolo de actuación establecido.

En este Protocolo se contempla una Red de coordinación: para establecer las relaciones del sistema penal con otros organismos y con las distintas instancias que intervienen en el proceso penal (jurídicas, policiales, sanitarias) y de las entidades públicas y privadas que participan en la lucha contra la violencia.

Otra de las medidas de apoyo adoptadas para garantizar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva son las Unidades Forenses de Valoración Integral.

Las Unidades Forenses de Valoración Integral fueron creadas por la LO 1/2004 para hacer posible el cumplimiento de los objetivos propuestos en dicha norma y dar una adecuada respuesta a las expectativas generadas con su promulgación. Cuentan con profesionales del Cuerpo de Médicos Forenses y con personal laboral perteneciente a las categorías de Psicólogo y Trabajador Social (Equipos Técnicos).

Así, en la actualidad, todos los IML dependientes de este departamento tienen una UVI, con al menos un equipo por provincia. En total hay 23 UVIS en el territorio competencia del MJU.

Una de las novedades impulsadas este año desde el MJU dirigidas a la protección de las víctimas de violencia de género es la referida a la valoración urgente del riesgo por parte de los médicos forenses que prestan servicios en las UVIS mencionadas anteriormente y que ya ha sido objeto de explicación anterior.

Todo este elenco de actuaciones realizadas en el rápido recorrido que he descrito: juzgados, fiscalías, asistencia jurídica, UVIS, OAVS, siguen teniendo respaldo económico como se demuestra con las partidas presupuestarias reconocidas en los PGE para 2011, en los que se contempla la cantidad de 44 millones de euros destinada a la lucha contra la violencia de género, partida que va dirigida al mantenimiento de esta clase de juzgados, fiscalías especializadas, unidades forenses, asistencia jurídica y psicológica a las víctimas y formación del personal de la Administración de Justicia, punto que también es esencial para conseguir el objetivo de disponer de profesionales preparados y sensibilizados en esta materia, formación que alcanza a Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y Personal funcionario con los cursos que anualmente celebra el Centro de Estudios Jurídicos.

Todo esto demuestra que se ha avanzado notablemente en la lucha contra la violencia de género, especialmente tomando como punto de inflexión la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero nos quedan todavía muchos retos por afrontar.

Algunos frutos ya son visibles y otros no tardarán en dejarse ver, no hay que olvidar que se requiere un cambio social y cultural muy profundo, y todo eso lleva su tiempo.

Para alcanzar nuestro objetivo y culminar este cambio social y cultural, sin duda la celebración de Congresos de esta naturaleza contribuyen a conseguirlo porque se ponen en común problemas, deficiencias, se comparten resultados y proyectos e ideas de futuro.

Deseamos que estos objetivos se hayan cumplido en este IV Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género.

Muchas gracias. Se declara clausurado el IV Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género.